

parte I

*Los análisis de la
seguridad y la defensa*

Análisis de la seguridad

1. La guerra al crimen organizado¹

Felipe Calderón Hinojosa

En 90 minutos de plática, queda claro que el mandatario tiene una obsesión. Aunque atiende con especial énfasis la crisis económica, y no deja de medir el ambiente político, sus desvelos son por la guerra contra el narcotráfico. El semblante risueño del presidente y sus modos relajados parecerían corresponder a los de un mandatario de otro país, uno en el cual no hay por lo menos 20 ejecutados diarios o una crisis que comienza a ser galopante. Pero tan pronto comienza a hablar, se advierte hasta qué punto el tema de la guerra contra el narcotráfico se ha convertido en una obsesión para Felipe Calderón: “El crimen organizado busca el control territorial”, advierte el mandatario; será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco, dice. No hay regreso; son ellos o nosotros.

JZP: El día de la bandera, usted anunció con bombo y platillo “el punto final” de la batalla al crimen organizado. Pero no se dio a conocer alguna nueva estrategia para combatirlo, lo cual provoca incredulidad. Después de más de dos años de lucha contra los cárteles, ¿por qué habría de creerse que ahora tendríamos éxito?

FCH: Es una decisión de gobierno, que debe ser una decisión de país. Mientras haya adicciones y demanda, tráfico y consumo de drogas, no puede terminarse, claro. Pero debemos enfocarnos en el crimen organizado y otros delitos vinculados a éste. Lo importante aquí es la decisión clave como país de hacerle frente y reducir ese problema, de manera tal que permita una convivencia ordenada y tranquila de los mexicanos.

JZP: Pero entonces no hay una modificación o un giro de la estrategia en el combate al crimen organizado. Se trata simplemente del anuncio de un acto de voluntad política. Pero eso nunca lo habíamos puesto en duda, porque usted lo ha encarado desde el principio de su gobierno.

FCH: El elemento clave en la etapa que estamos pasando es precisamente una expresión de voluntad política que a mi juicio hace falta. No sólo se trata de frasearla o expresarla, sino verdaderamente llevarla adelante. Pero tampoco se descarta un replanteamiento de fondo de la propia estrategia que siempre requiere, a mi juicio, una revisión constante. La estrategia está planteada sobre dos horizontes: uno de muy corto plazo que consiste en reposicionar la autoridad y la potestad del Estado mediante la movilización de la fuerza pública y el ejército. No podemos perder territorios en entidades federativas donde se ha vulnerado la autoridad. Pero el elemento detonante es

¹ Extractos de la entrevista de Jorge Zepeda Patterson, *El Universal*, 27 de febrero de 2009.

el largo plazo, y eso implica una estrategia de reconstrucción institucional completa: no sólo de las estructuras policíacas sino de las propias estructuras públicas. Eso implica la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos, la generación de nuevos sistemas de información e inteligencia, un nuevo marco institucional legal, como el que hemos planteado al Congreso de la Unión. Primero la reforma constitucional y luego la reforma legal. Y además, desde luego, una nueva orientación enfocada a la prevención que aún no hemos tenido en el país y que vale la pena darle mayor acento.

JZP: Transmite usted la sensación de estar convencido de que otros poderes no comparten esta voluntad política. ¿Se siente sólo frente a este cometido? De eso se trató la última reunión con los gobernadores, ¿no?

FCH: Ese fue el tono de esa conversación privada que tuvimos con los gobernadores, porque así lo planteó la propia dirigencia del PRI. Fue una conversación muy enriquecedora y lo que yo recojo es el compromiso al que arribamos, de trabajar todos juntos. El propio secretario general del PRI, Murillo Karam, dijo: “presidente, sabemos que, o le entramos todos o no sale nadie”. Y yo me quedaría con eso. No juzgo a otras esferas de gobierno y partidos. Simple y sencillamente hago patente la voluntad del gobierno federal para luchar decididamente contra la delincuencia. Eso sí, vale la pena que cada quien revise en su ámbito de responsabilidad, el grado de compromiso en el combate a la criminalidad; en algunos estados esta contundencia y grado de compromiso ha estado presente pero en otros no.

JZP: Hay una preocupación creciente por el tema de los daños colaterales que deja la lucha contra los cárteles: la violación de derechos humanos. Esta semana se hizo público un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos que constituye prácticamente un regaño a México en ese sentido.

FCH: Yo creo que México ha pagado en el pasado y está pagando un alto costo derivado de la inseguridad, y precisamente es el costo que tenemos que medir a la hora de evaluar estas acciones. Es decir, me parece que los costos asociados a combatir la inseguridad con determinación son siempre menores, abismalmente menores, que los costos asociados a simplemente dejar pasar a la criminalidad y que ésta se adueña de los espacios y de las decisiones de los mexicanos. El costo de no hacerlo es infinitamente mayor porque implica, ciertamente, la pérdida del territorio o la pérdida de la propia capacidad del país de determinar su destino.

JZP: Pero eso equivaldría a considerar que los derechos civiles, los derechos humanos son algo prescindible en esta batalla...

FCH: Yo creo que afortunadamente estamos en un Estado democrático, y lo exigente de este reto es hacer este combate, esta lucha, en el marco de los derechos humanos; pero sin perder de vista que la mayor amenaza a los derechos humanos en México es la criminalidad.

JZP: Pero adentro y afuera del país se considera que se está perdiendo en el tema de los derechos humanos...

FCH: En el ámbito internacional sí hay un problema de información y de percepción que quizá no hemos abordado bien. Y hablo a nombre del gobierno. No se trata de negar la realidad de lo que ocurre en México, pero sí ponerla en una justa dimensión, sobre todo las versiones que aluden al Estado fallido, por ejemplo. Una cosa es un análisis y una crítica, que además es bienvenida, y la otra es decir que aquí el Estado no existe. Aquí tenemos poderes que funcionan bien; un Poder Judicial que yo creo que opera como nunca, con la Suprema Corte en una de sus mejores épocas; el Poder Legislativo robusto y que funciona, y un Poder Ejecutivo que está asumiendo un compromiso muy serio con los problemas más importantes del país.

JZP: ¿Cuánta responsabilidad tendría el gabinete mismo en estos problemas de comunicación, que hace que se perciba a México adentro y afuera de manera desinformada, como usted dice? Son conocidos los deslices de varios miembros de su gobierno en días recientes.

FCH: Sin duda hemos fallado en la comunicación, refiriéndome a los comentarios que han hecho colaboradores míos recientemente. Pero el tema es complejo. La canciller hizo una declaración que fue interpretada con mucha virulencia. Pero hay que poner en contexto su afirmación. Lo que la canciller señala, y creo que eso es sustentable con cifras, es que 57% de las muertes vinculadas al crimen organizado el año pasado ocurrieron en tres estados: Chihuahua, Baja California y Sinaloa. De estas muertes, más de 90% se trata de personas asociadas a la criminalidad. Un dato relevante, por ejemplo, es que más de 25% de esas víctimas no han sido identificadas; de hecho de casi la tercera parte, sus cuerpos no son reclamados.

JZP: Lo cual nos regresaría al deterioro de los derechos humanos. En EL UNIVERSAL acabamos de publicar un reportaje sobre “Las almas muertas”. La justicia ni siquiera investiga estos crímenes, como si no se tratase de seres humanos. Pese a que se trata de asesinatos, ni siquiera por procedimiento son investigados.

FCH: Las muertes las está explicando una confrontación muy clara entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa con sus respectivos aliados. El cártel de Juárez asociado a Arturo Beltrán Leyva y a Los Zetas; el de Sinaloa está asociado un poco a grupos que actúan en el Pacífico y si no asociado, al menos muy cercano a La Familia. Pero la confrontación es por plazas, concretamente por Tijuana, Culiacán y Ciudad Juárez. Aunque en el caso de Culiacán y de Tijuana los niveles de confrontación, las últimas semanas o meses, ya se han reducido notablemente.

JZP: ¿Considera usted que también se ha politizado la lucha contra el narcotráfico?

FCH: Es mucho más complejo que eso. Poca gente advierte que ha habido un cambio medular en la lógica de las organizaciones criminales. En el pasado, los narcotraficantes eran eso: organizaciones enfocadas al trasiego, a traficar la droga. Y punto. Por

su propia naturaleza, este “modelo de negocios” debía tener un bajo perfil. Se concentraba en controlar ciertas rutas y ciudades. Sin embargo, en los últimos años hubo un cambio sustancial: el negocio derivó o se amplió a la distribución y al consumo de la droga en México, y eso cambia totalmente los parámetros de su actividad. Mientras uno [un modelo] implica la discreción y el bajo perfil, el tráfico a Estados Unidos, el otro [modelo] entraña un elemento indispensable que es el control territorial. El control territorial implica un perfil abierto que busca el dominio e incluso el sometimiento de comunidades y de sus autoridades a los intereses de estas mafias.

JZP: Un cambio de paradigma, pero de enormes consecuencias para todos los mexicanos.

FCH: Consecuencias brutales. El control territorial implica cierta lumpenización de los propios narcotraficantes. Ya no es nada más el típico ex policía judicial que controlaba estos grupos; se trata de bandas criminales en las que deben apoyarse para controlar la plaza. Evidentemente se diversificaron hacia otras actividades criminales: a controlar primero todas las actividades ilícitas, y luego brincaron rápidamente a la extorsión, a los secuestros.

JZP: El cambio de delincuencia tendría que haber cambiado al propio aparato de justicia, que parece haber quedado obsoleto.

FCH: No sólo eso. Yo creo que había una regla no escrita en el viejo modelo político del país, sin dar ni nombres, ni colores, ni partidos; había una cultura política según la cual el entendimiento implícito era: “Yo no me meto con ustedes porque finalmente lo que hacen es un delito federal, y a mí no me corresponde perseguirlo; ustedes no se meten conmigo, y yo no me meto con ustedes”. No quiero decir que funcionaba, porque esa cultura política permitió la expansión de la criminalidad en el país. Pero cuando cambia el “modelo de negocios” al modelo de control territorial, esta cultura o este entendimiento, simple y sencillamente resulta catastrófica. Los que consideran que deberíamos regresar a “la estrategia” anterior, no se dan cuenta de que eso no es posible. Remitirnos a “dejar hacer y dejar pasar” equivaldría a permitirles el control de la sociedad mexicana. Se están metiendo con los empresarios para extorsionarlos, con las amas de casa, imponiendo su ley en la vida social. Ese mito de que tienen su propio código de ética y que si no nos metemos con ellos entonces no se meterían con nosotros, es falso. Los operativos militares y policíacos masivos que hemos puesto en marcha evidentemente no hacen desaparecer la actividad criminal, pero sí hacen que el Estado pueda fortalecer, recuperar o asumir plenamente el imperio del Estado sobre su propio territorio.

JZP: Yo creo que hay consenso para dar esa batalla. La pregunta que con todo derecho se hacen los mexicanos es si el presidente tiene alguna idea de cuándo comenzará un punto de inflexión en la espiral de violencia y la criminalidad, que siguen aumentando. ¿Hay alguna previsión de cuándo tocaremos fondo, cuándo comenzaremos a ganar esta guerra?

FCH: Yo creo que sería irresponsable de mi parte hacer pronósticos en el tiempo. El camino de solución implica enfocarnos en los métodos para recomponer esto. Los

métodos correctos nos van a generar los resultados deseados; mientras más nos tardemos en implementarlos, más tardarán los resultados. ¿Qué procesos? Por ejemplo, la desertión militar. En el sexenio pasado hubo una desertión de casi un ejército: de un total de 260 ó 280 mil elementos, salieron casi 130 mil elementos. Eso debe corregirse. ¿Cómo? Estableciendo elementos de lealtad, de arraigo en los propios soldados a su propia militancia. Cuando yo entré a la Presidencia un soldado raso ganaba 2,500 pesos más una compensación, según la zona militar; hoy el soldado raso está ganando por lo menos 7,500 pesos. Mejor vivienda y becas para sus hijos es parte de una solución de fondo a este problema, entre otros aspectos.

2. La seguridad pública en México. Síntesis social

Jorge Tello Peón²

En inteligencia se dice que la disponibilidad de información no garantiza el “conocimiento”, y generalmente se acepta la necesidad de completar un proceso de registro y análisis, para alcanzar conclusiones, que eventualmente puedan llevar a soluciones prácticas.

La gran cantidad de información que “fluye” sobre la seguridad en México, crimen, violencia e impunidad, es asimilada como riesgo a la seguridad personal y se transforma en miedo, confusión, enojo y frustración entre la población. Las noticias recurrentes de hechos cada vez más violentos que suceden a lo largo y ancho del país provocan emoción intensa, aunque se manejan ya como un componente natural del negocio de los medios de comunicación. Este proceso genera una sensación de saturación que “embota” y aturde los sentidos, sin capacidad para construir soluciones y alternativas de acción. La población se convierte en la víctima pasiva de la inseguridad pública.

En este entorno cada día más violento, se ha generado un ánimo nacional de ansiedad y angustia, donde los más pesimistas se convierten en “optimistas bien informados”, y ha motivado que el ciudadano promedio quiera expresarse y termine por ser parte de enormes contingentes que, desde las calles, buscan hacer oír su voz con un grito que es mezcla de ansiedad, reclamo y preocupación, pero que poco ayudará si no se

² Presidencia de la República. Opinión personal del autor.

logra concretar en acciones. No se trata, pues, únicamente de participar en una marcha, sino de marchar hacia la participación, entendiendo mejor las causas de lo que sucede y lo que se puede hacer al respecto.

Vale entonces la pena la reflexión que coadyuve a entender para atender el problema, y convertir esta nueva realidad en una oportunidad para encontrar al ciudadano perdido, que ansía un país distinto ¿quién es primero, el ciudadano o el Estado? ¿el huevo o la gallina?

Por primera vez en muchos años se ha perdido control territorial por parte de las estructuras institucionales y, lo que tal vez sea peor, se han perdido también estructuras históricas. Antes por lo menos se sabía quiénes eran.

El monopolio de la violencia y de la recaudación de impuestos corresponde al gobierno. Lo que está sucediendo en Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa y muchos otros estados de la República, es motivo de alarma nacional. La reciente reunión y acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública puede ser el principio de una respuesta de Estado. La sociedad civil demanda, pero también puede ser un actor activo. Sucedió ya en el Distrito Federal en 1985 cuando los ciudadanos fueron los primeros en atender la emergencia del terremoto sin necesidad de esperar la actuación de las instituciones del Estado. Los habitantes de la ciudad de México actuaron como ciudadanos y no sólo como derechohabientes. No hay mal que por bien no venga.

Con este afán de participación, se pone a consideración una relación de reflexiones sobre el tema, presentadas a manera de aforismos, que pretenden ayudar a entender mejor qué nos pasa y en qué forma se puede avanzar en la participación ciudadana.

La seguridad absoluta no existe, es sólo un estado ideal, que depende de la percepción y del valor esperado. La seguridad es subjetiva. La seguridad plena (objetiva) es un “sueño de la razón”. El nivel de seguridad es lo que hace la diferencia.

La seguridad es síntesis de la vida social. La seguridad depende de todos los miembros de una sociedad, por ello cabe decir que cada sociedad tiene el nivel de seguridad que, como cuerpo social, es capaz de generar.

La seguridad no se aísla. En el largo plazo los objetivos públicos y los privados siempre convergen. Una sociedad viaja siempre en “el mismo barco”. No hay “islas de seguridad rodeadas de mares de inseguridad”. Imposible salvarse sólo. Más que en cualquier otro campo, aquí no se puede llegar primero: lo importante es llegar todos juntos y a tiempo. Las rejas y los muros sólo sirven para aislar y pauperizar ciudadanos, ciudades y países.

En seguridad no hay cabida a la ambigüedad. Se es parte o contra. No se puede “flotar” porque las corrientes llevan siempre a la lógica del crimen organizado. La simulación o la pretensión de quedar al margen y no confrontar, harán a cualquier autoridad, primero, funcional y, luego, irremediable cómplice, al principio sólo de manera

pasiva y, eventualmente, como activo y directo colaborador del crimen. A eso lleva la lógica de la no acción en el campo de la seguridad.

La seguridad es un mal negocio político. Si se invierte cuando los “mercados políticos” lo exigen es casi seguro que se incurrirá en una inversión muy cara y con dividendos pobres. Abordar el problema con eficacia requiere de un verdadero sentido de Estado, disciplina, institucionalidad y consistencia en la implementación de políticas por parte de las autoridades responsables.

Del sentido de la urgencia depende la trascendencia. Como figura metafórica se puede decir que es tan importante “remar” como “sacar el agua”. Si sólo se rema, se corre el riesgo de no llegar a la otra orilla; si sólo se saca el agua, la nave no se moverá, sólo se mantendrá a flote; no llegará a ninguna parte.

Hay que distinguir y privilegiar lo estratégico sobre lo operativo. La estrategia para “abordar” el problema, y la operación para “atenderlo”. Lo primero sin lo segundo no tiene utilidad alguna; lo segundo sin lo primero es como navegar sin timón. El orden de los factores, en este caso, si importa. El sentido de urgencia no debe trastocar el orden de los factores.

La “gobernación” es la primera función de seguridad. Más que de las autoridades de seguridad y procuración de Justicia, la responsabilidad de concitar las voluntades políticas en una “respuesta de Estado” y concertar su acción; coordinar la participación de poderes y niveles de gobierno y disciplinar las estructuras administrativas de gobernación. En nuestra estructura institucional, corresponde a la Secretaría de Gobernación operar un verdadero sistema nacional de seguridad pública. Valdría la pena revisar la pertinencia de la participación formal de esa dependencia en el “Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

La seguridad se construye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El jefe de Estado, jefes de gobierno, responsables de dependencias, comandancias o ciudadanos, todos son principio y fin de cadenas de acción. El individuo que cierra la puerta, el ciudadano que opta por denunciar, el policía que se mantiene en vigilia o aplica correctamente el procedimiento o el gobernador que garantiza la coordinación de sus policías. Todos tienen responsabilidades en el ciclo de los procesos de seguridad.

El que paga o pega, manda. Este refrán es parte de la cultura y del ejercicio del poder y del sentido común para la supervivencia en nuestro país. Hay que querer o temer al que manda para que verdaderamente mande. Hoy queda claro que se teme al delincuente, lo que está en duda es si existe alguna autoridad a la que la delincuencia le tema. Las autoridades “funcionales” al delito no necesitan ser corruptas, basta con que supongan que el “mando” lo tienen los delincuentes.

Los procesos delictivos son siempre graduales y progresivos. De una infracción menor (exitosa) nace el atrevimiento de escalar a la toma de mayores riesgos, en busca de mayores beneficios. Es la progresión geométrica del crimen, producto de la impuni-

dad. No hay delito pequeño. Esta es la razón de ser de los modelos policíacos de “cero tolerancia”.

El grado de responsabilidad depende del nivel de influencia y poder ejercido. Todos los miembros de la sociedad nacional tienen responsabilidades, pero el alcalde tiene más que el jefe de la policía y éste más que el jefe de manzana o el director de escuela. El padre de familia la tiene sobre el adolescente. La autoridad federal sobre la estatal; el ministro sobre el magistrado. Que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponda: nada más ni nada menos, pero sin olvidar que el “agua siempre cae de arriba hacia abajo”.

La impunidad es la incubadora de la inseguridad. Sea del delincuente, de la autoridad o el ciudadano, sin consecuencias de sus acciones u omisiones, genera la reproducción de la conducta.

Ojalá que estas ideas, que no son sino el producto de alguna experiencia, observación y reflexión de la realidad, sean de alguna utilidad para entender mejor lo que sucede y plantear un tema fundamental: cuando la forma en que venimos navegando no nos permite avanzar lo que requerimos, se hace necesario navegar en forma distinta. Queda claro que si seguimos haciendo las cosas en formas y maneras que hasta ahora nos han dado resultados insuficientes; por más que invirtamos por ese mismo camino, no tendremos dividendos.

México está cambiando. Las estructuras de poder están en transición. Los esquemas tradicionales de control social están en transformación, desde la familia o la escuela, hasta el sindicato, el ejido, la comunidad religiosa o los partidos políticos, que ya no son lo que eran y todavía no alcanzan su nueva versión. Es el camino y el costo de la evolución democrática, pero también la oportunidad que plantea, y en esto último debemos fincar nuestro optimismo. Como diría el famoso poeta Paul Valery, “el futuro ya no es lo que era antes”.

3. La Conexión Colombia-México-Estados Unidos

Bruce Bagley

Este artículo analiza los momentos clave en la evolución dinámica del comercio de droga Andino-Mexicano-Americano en las últimas dos décadas, poniendo particular

énfasis en la conexión México-Colombia y tomando en cuenta los factores principales que explican porqué al comienzo del siglo XXI, México se ha convertido en el violento epicentro del contrabando de cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos.

Durante las últimas dos décadas, los grupos de crimen organizado mexicano se han involucrado poco a poco en el comercio de cocaína originado en los Andes y en Colombia, concentrándose en el tránsito de cocaína refinada de Colombia a través del territorio Mexicano, para introducirla en los Estados Unidos. A comienzos del nuevo milenio, los grupos criminales mexicanos han efectivamente desplazado a los “cárteles” colombianos de Medellín y Cali, así como a sus herederos, los llamados “cartelitos” que quedaron tras el desmantelamiento de los grandes monopolios en los años noventa.

Estados Unidos se sigue manteniendo como el mayor mercado mundial de cocaína. Se estima que aproximadamente cada año, 350 toneladas métricas de cocaína (de un total de producción anual de alrededor de 1,000 toneladas métricas) son consumidas por alrededor de 6 millones de usuarios estadounidenses, los cuales gastan 40 mil millones de dólares anualmente en este proceso. De modo que el total del mercado de droga ilícito en Estados Unidos podría llegar a \$150 mil millones anuales.

Se calcula que las organizaciones criminales mexicanas han ganado por lo menos 15 mil millones de dólares anualmente, con la posibilidad de llegar hasta 25 mil millones de dólares en los mejores años, dependiendo del precio del mercado, cuando las ganancias del contrabando de cocaína se suman a las ganancias derivadas de otras drogas dentro de este comercio ilícito, las cuales son previamente cultivadas y manufacturadas en México (especialmente la marihuana, heroína/opio y metanfetaminas). Este multimillonario mercado ha generado una sangrienta competencia por su control entre los seis principales cárteles mexicanos (Sinaloa, Golfo/Zetas, Tijuana, Juárez, Beltrán Leyva y la Familia Michoacana) y docenas de bandas menores. Durante los últimos tres años esta competencia ha desatado una guerra pandillera brutal en México, que ha dejado 6,290 homicidios solamente en 2008, cifra que se suma a las 3,200 muertes relacionadas con la droga en 2007 y las 1,807 ejecuciones por droga que tuvieron lugar en los primeros tres meses de 2009. Desde que el presidente Felipe Calderón asumió la presidencia el primero de diciembre de 2006, se cuentan al menos 11,297 asesinatos relacionados con las drogas ilícitas en México.

El alcance y la intensidad de los vínculos de los cárteles mexicanos con el comercio de droga andino se han expandido y evolucionado desde inicios de la década de los noventa. Durante esos años, los mexicanos se ubicaron como intermediarios entre los productores andinos y quienes controlaban el mercado al interior de Estados Unidos.

Primeros contactos

Debido a la creciente demanda de cocaína en los Estados Unidos durante las décadas de los setenta y ochenta, aparece en Colombia el primer gran cártel conocido como el

“Cártel de Medellín”, seguido por su competidor, el “Cártel de Cali”. Durante esos veinte años, tanto el cártel de Medellín como el de Cali logran controlar rápidamente la exportación de cocaína desde los Andes hacia los Estados Unidos. Así, ambos se dan a conocer como las más poderosas y despiadadas organizaciones criminales del hemisferio occidental. Ambos comienzan sus empresas de contrabando por vía aérea, importando clandestinamente la “base” o “pasta” (pasta básica) desde el sur de los Andes, especialmente desde la región del Alto de Huallaga en Perú (en donde se origina 65% de la producción mundial de coca) y desde la región del Chapare en Bolivia (donde se produce 25%) hacia Colombia. En este país se refina el producto, que es trasladado por vía marítima, utilizando buques de carga o botes rápidos, o por vía aérea a través del Caribe, con destino en el sur de la Florida. De allí, a través de redes criminales que emplean automóviles, camionetas o aviones, se distribuye a los Estados Unidos.

Durante la primera mitad de la década de los ochenta, los vínculos desarrollados por los cárteles de Medellín y Cali, les proporcionaron una gran riqueza. De ello resultó, además, un incremento en la violencia y la aparición de la “narcopolítica”.⁴ Durante esta época, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se implicaron también en la producción y refinamiento de coca, principalmente como “protectores” de los campesinos que la cultivaban. También asumieron el papel de “guardias” de los cárteles en operaciones de refinación, ayudando a la vigilancia de las pistas de aterrizaje ilegales en el campo colombiano. Como resultado de su posición dominante dentro del boom del comercio de cocaína, los cárteles colombianos eran incuestionablemente más ricos y poderosos que los grupos criminales de México, los cuales estaban entonces relacionados solamente con la producción, el contrabando de marihuana y heroína, así como de su comercio hacia el mercado americano.

En respuesta al flujo de cocaína comercializada a través del Caribe desde Colombia, el presidente Ronald Reagan creó en 1982 el grupo de trabajo del sur de Florida (*South Florida Task Force*) y designó al entonces vicepresidente George H. W. Bush a la cabeza del mismo. En un esfuerzo para poner fin al tráfico de cocaína colombiana en el Caribe, este grupo de trabajo tenía como objetivo coordinar – por primera vez – la aplicación de la ley federal y los activos militares en la declarada, por el mismo presidente, “Guerra contra las Drogas”. Para financiar esta guerra, el presidente designó los activos locales y estatales. Hacia la mitad y finales de los ochentas, este grupo de trabajo tuvo eventualmente un gran éxito al reducir de forma importante el tráfico de cocaína proveniente de Colombia hacia Florida y el sureste de los Estados Unidos por las islas caribeñas.

⁴ Muchas fuentes estiman que los dos cárteles colombianos tenían ganancias que ascendían a 4 mil millones de dólares anualmente, desde inicios de los años ochenta, cuando se expande el “boom” del consumo de cocaína en Estados Unidos.

La profundización de la participación de las organizaciones mexicanas en el comercio de cocaína andino

En 1984, los sicarios del cártel de Medellín bajo las órdenes del capo Pablo Escobar, asesinan al entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Acto seguido y para evitar las furiosas represalias del gobierno del presidente Belisario Betancourt, los poderosos cárteles de Medellín y Cali escapan a Panamá por algunos meses. Mientras se escondían en Panamá, los capos descubrieron un nuevo socio en el negocio criminal, el dictador panameño general Manuel Antonio Noriega. Debido a su posición de jefe de Estado, la situación geopolítica de Panamá y las facilidades que brinda su Canal, Noriega se encontraba en una posición idónea para facilitar sus actividades de contrabando de cocaína. Por lo que hacia mediados y finales de los ochentas, los traficantes colombianos, con la complicidad de Noriega, comenzaron a reordenar sus operaciones de tráfico de cocaína fuera del Caribe, a través de Panamá, América Central, México y, posteriormente, a través de la frontera norte de México, hacia los Estados Unidos.

Los conflictos armados de Centroamérica en la década de los ochenta, particularmente la guerra clandestina “Contra”, patrocinada por la administración Reagan y la CIA en contra de los sandinistas en Nicaragua, generaron condiciones caóticas a través de toda América Central. Este caos facilitó el involucramiento de los Contras en el tráfico de la cocaína a través de la región, lo que les permitió financiar sus actividades clandestinas. Pistas remotas de aterrizaje en Honduras, Guatemala, e incluso Costa Rica fueron usadas por los colombianos, a menudo con la cooperación de oficiales corruptos de los gobiernos locales, hacia el norte de México. Con ello se abrió un nuevo corredor estratégico para la exportación de la cocaína a Estados Unidos.

Los cárteles colombianos comenzaron a resentir la constante presión ejercida por el grupo de trabajo del sur de Florida en el Caribe. Por lo cual, hacia fines de los ochenta, en lugar del Caribe, los cárteles colombianos utilizaron a América Central y México, regiones que se convirtieron en la ruta preferida para el envío de la cocaína. Inicialmente, los colombianos simplemente pagaban una tarifa fija a los funcionarios de gobierno de América Central y México, así como a las organizaciones criminales, por sus servicios de asistencia en las operaciones de tránsito.

La primera organización mexicana en involucrarse de manera profunda en el tráfico de cocaína colombiana fue el “Cártel de Juárez”, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, conocido también como el “Señor de los Cielos”. Este apodo lo adquiere porque construyó una gran flota aérea para transportar la cocaína colombiana de América Central a través de la frontera de México-Estados Unidos. El cártel de Juárez fue rápidamente seguido por otras organizaciones mexicanas traficantes, como por ejemplo el “Cártel de Tijuana”, que se consolida bajo el mando de los hermanos Arellano Félix.

En 1989-1990, se combinan importantes acontecimientos ocurridos tanto en América Central como en Estados Unidos, que cambiaron la situación, reduciendo el

rol de Centroamérica en el contrabando de cocaína expandiendo, al mismo tiempo, la importancia de la conexión de los cárteles con México. El vicepresidente en turno George H. W. Bush, se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1989. En diciembre de ese mismo año ordena una invasión a Panamá. Como parte de esta operación, se captura al general Noriega, poniendo punto final a su participación en el tráfico de cocaína. Es importante tomar en cuenta que durante los primeros meses de su presidencia y antes de invadir Panamá, el presidente Bush optó por cortar su ayuda a los Contras, decidió más bien apoyar el proceso de paz llamado Esquipulas II, encabezado por el presidente costarricense Oscar Arias. Finalmente, entre 1990 y 1996 se firmaron los acuerdos de paz en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y se inició el reestablecimiento del control estatal en América Central.

La caída de los cárteles colombianos

Simultáneamente, la industria cocalera colombiana sufre cambios mayores dentro de su propia estructura, facilitando así una mayor participación a los traficantes mexicanos. En agosto de 1989, el capo Pablo Escobar manda asesinar en las afueras de Bogotá al entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán. En represalia, el presidente en turno, Virgilio Barco Vargas, le declaró una guerra total al cártel de Medellín, y, con el apoyo de los Estados Unidos, lanzó una campaña militar en contra de Pablo Escobar y toda su organización. Mientras tanto, en 1991, Pablo Escobar inició negociaciones con el gobierno colombiano, acordando una rendición basada en su estancia temporal en cautiverio. Su encarcelamiento, que el mismo financió, se llevó a cabo en la prisión llamada irónicamente “La Catedral”, localizada en Envigado, Antioquía, justo fuera de Medellín. En 1992, burlándose del gobierno, Pablo Escobar escapó de su propia cárcel y reinició sus actividades de contrabando de cocaína. De inmediato se formó un “bloque de búsqueda” para perseguirlo. Escobar fue encontrado y asesinado por las fuerzas de seguridad colombianas el 3 de Diciembre de 1993, con la participación substancial de los Estados Unidos.

En los inicios de 1994, el asesinato de Escobar, junto con el inmediato arresto de la mayoría de los otros capos del cártel de Medellín por las fuerzas colombianas, deja a los miembros del cártel de Cali, quienes habían cooperado con las autoridades en la caza de Pablo, en una posición dominante en la industria de la cocaína. Sin embargo, para mediados de 1995, la presión proveniente tanto de las autoridades colombianas como de las estadounidenses, las cuales exigían la aplicación de la ley hacia el cártel de Cali, obligó a sus jefes, los hermanos Rodríguez Orejuela, a aceptar los términos de negociación que les ofrecía la administración del entonces presidente Ernesto Samper. La rendición efectiva de los dos principales jefes del cártel de Cali en 1995 marcó el final de la era de dominación de los dos cárteles, Medellín y Cali, en el comercio de cocaína en Colombia. Este logro se llevó a cabo a pesar de que la adminis-

tración de Samper se había viciado desde el inicio del mes de agosto de 1994 por acusaciones de que había aceptado 6.1 millones de dólares del cártel de Cali para su campaña electoral, buscando asegurar un acuerdo favorable.

Esto no significó el final del papel jugado por Colombia en el tráfico de cocaína. De hecho, a mediados de la década de los noventa, Colombia logra rápidamente suplantar a Perú y Bolivia como el mayor productor de coca de los Andes. Esto sucede gracias a las acciones del gobierno del presidente de Perú, Alberto Fujimori. Durante los inicios de la década de los noventa, el gobierno de Fujimori comienza a derribar aeronaves transportadoras de pasta básica provenientes del valle del Alto de Huallaga en Perú y la región del Chapare de Bolivia, destinados a los laboratorios dentro del territorio de Colombia, interrumpiendo efectivamente el puente aéreo previamente establecido entre Perú y Colombia. Contrarrestando estas interrupciones, se desarrolla en Colombia un boom de cultivos de coca en los llanos orientales y en las regiones de la cuenca del Amazonas en el este y sur del país. Por ello, a inicios de 2000 Colombia ya cultivaba un estimado de 90% del suministro disponible de coca en la región.

La caída de los cárteles de Medellín y Cali dejó un vacío en el comercio de cocaína colombiana. Algunos traficantes colombianos buscaron reconstruir los cárteles mayores de los restos del cártel de Medellín (por ejemplo, el cártel del Milenio, encabezado por Alejandro Bernal a finales de los noventa) o Cali (como el cártel del Valle del Norte, cuyo jefe es Don Diego, que desde los noventa hasta la fecha monopoliza el negocio de la coca). Pero la mayoría de estos esfuerzos fracasaron porque los cárteles grandes, prominentes y violentos, atraen demasiada atención de las agencias antinarcóticas y de inteligencia colombianas y estadounidenses. Como consecuencia, este vacío fue rápidamente llenado por un número proliferante de “cartelitos”. Gracias a sus esfuerzos por evitar su detección y arresto, los cartelitos fueron capaces de asumir un perfil menos violento en la sociedad y en la política, por lo que, hacia el año 2000, existían ya en Colombia aproximadamente 300 pequeños cartelitos que llenaban eficazmente el espacio dejado por el desmembramiento de los cárteles Medellín y Cali. Solamente el cártel del Norte del Valle logró sobrevivir hasta el año 2008, perseguido por las fuerzas colombianas y estadounidenses.

Estos nuevos cartelitos cedieron el control del cultivo y procesamiento de coca en la zona rural colombiana a la guerrilla izquierdista de las FARC y a la organización paramilitar derechista de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las FARC y las AUC controlan la mayoría de las áreas de cultivo de coca en las zonas rurales de Colombia, empleando su poder de fuego, mientras mantienen una sangrienta guerra interna por la manutención y expansión del control territorial. Enfocados principalmente en la exportación de la cocaína refinada obtenida de las FARC y de las AUC, pero con capacidades logísticas muy disminuidas en comparación con Medellín y Cali, los cartelitos quedaron cada vez más atomizados, lo que los forzó a forjar alianzas y relaciones

comerciales con organizaciones criminales y traficantes fuera de Colombia, creando así nuevos espacios y oportunidades para los mexicanos, que rápida y entusiastamente ampliaron su poder, ubicándose en un lugar dominante en el negocio.

El alza de los traficantes de cocaína mexicanos

Durante la segunda mitad de los noventa grupos mexicanos comenzaron a incursionar en el negocio de la cocaína, primero en Juárez, bajo la dirección de la familia Carrillo Fuentes y luego en Tijuana, con la familia Arellano Félix. Estas familias se involucraron progresivamente, sobre todo en el comercio de cocaína fuera de Colombia. Al principio de la actual década, los primeros acuerdos alcanzados por Medellín establecían que la paga a las organizaciones mexicanas consistía en una tarifa fija por sus servicios. Viéndose en desventaja, las organizaciones mexicanas comenzaron a exigir una mayor participación en las operaciones de contrabando. En lugar de fuertes tasas como pago, comenzaron a demandar la mitad de cada cargamento de cocaína colombiana. En intercambio, las organizaciones mexicanas garantizaban la entrega en los Estados Unidos de la otra mitad a los cartelitos colombianos. Si fallaban, los colombianos eran compensados por sus pérdidas a un precio previamente acordado. Bajo estos nuevos términos, las organizaciones mexicanas rápidamente profundizaron su involucramiento en el negocio altamente lucrativo de distribución de cocaína en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se enriquecieron y se hicieron más poderosas y violentas. Cuando menos desde el año 2000, los cárteles mexicanos dominan y concentran las mayores ganancias.

Los cárteles de Juárez y Tijuana no fueron las únicas bandas de traficantes que buscaron enriquecerse por el boom del tránsito del comercio de cocaína de Colombia a México. En los primeros tres años de su sexenio, el presidente Vicente Fox —que fue el primer presidente no perteneciente al PRI en 71 años— lanzó una campaña gubernamental contra el creciente poder y violencia de los cárteles de Juárez y Tijuana. Sus éxitos contra ambos cárteles, se debieron en gran parte a la exitosa transición del PRI al PAN, pues se dio una ruptura en los patrones tradicionales de soborno entre los elementos partidistas tradicionales que formaban el gobierno mexicano y los grandes cárteles, debilitando claramente tanto a Juárez como a Tijuana. Aún más, las iniciativas anticárteles de Fox produjeron la muerte de uno de los hermanos Arellano Félix, la captura de otro, y el arresto de varios capos de Juárez. El presidente Fox ganó elogios de Washington y de la administración de George W. Bush, pero no logró eliminar a las dos organizaciones completamente. No obstante, creó nuevas oportunidades para otras bandas mexicanas rivales que buscaban expandir su participación en el comercio de cocaína.

En la primera mitad de la década de 2000, dos organizaciones traficantes relativamente menos prominentes —El cártel de Sinaloa encabezada por Joaquín “El

Chapo” Guzmán Loera y el cártel del Golfo capitaneado por Osiel Cárdenas Guillén-, se movieron enérgicamente contra los cárteles de Juárez y Tijuana, con un éxito considerable, logrando forjar sus propios contactos entre los cartelitos colombianos y también con traficantes colombianos en Perú y Bolivia. Los cárteles del Golfo y Sinaloa establecieron nuevas rutas de contrabando por aire y tierra a lo largo de las costas del Pacífico y del Golfo. También lucharon violentamente para conseguir el control de plazas y puntos clave a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, especialmente en Tijuana y Juárez.

Para el año 2003, los cárteles de Sinaloa y el Golfo se transforman en los más dinámicos, poderosos, y brutales en el comercio de cocaína mexicana, suplantando exitosamente a los cárteles de Tijuana y Juárez. Pronto, estos dos cárteles se convirtieron en violentos rivales, cuando Sinaloa se esforzó por arrebatar el control de la plaza del cártel del Golfo de Nuevo Laredo-Laredo, que había sido controlada hasta entonces por Osiel Cárdenas y su grupo. El cártel del Golfo respondió en 2003 con el asalto violento al cártel de Sinaloa en su zona de control, contratando como sicarios a fuerzas especiales desertoras del ejército mexicano –los infames Zetas– para realizar operaciones de represalia como venganza en contra de Sinaloa y al Chapo, por lo que ascienden las ejecuciones y escalan los niveles de violencia entre los cárteles mexicanos.

Mientras tanto, a pesar de sus heridas, los cárteles de Juárez y Tijuana respondieron con violencia al cártel de Sinaloa en un intento desesperado por mantener su precaria situación en el comercio de cocaína. En suma, nuevas organizaciones (como La Familia michoacana) en otros estados mexicanos han surgido para pelear por el mercado. Se dan nuevas luchas dentro de los grupos establecidos como el de Sinaloa (que vio a la familia Beltrán Leyva quebrarse debido al liderazgo del Chapo) que han producido una gran fragmentación interna y muchas luchas dentro de los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez, junto con un complicado conjunto de alianzas cambiantes entre las varias bandas criminales, que se disputan los \$15 mil millones de dólares al año que genera el comercio de droga en el interior de México.

Causas y consecuencias de las guerras mexicanas de drogas

La presente lucha brutal por el control dentro y entre las organizaciones traficantes mexicanas es básicamente por las ganancias generadas por el tráfico de drogas. Es el producto de la confluencia de varios factores que han hecho de México el nuevo epicentro del tráfico de cocaína de Colombia y los Andes hacia los Estados Unidos. México se ha convertido en la vía preferida para el tránsito de la cocaína colombiana debido a los éxitos logrados por la administración del presidente colombiano Álvaro Uribe, especialmente a partir de 2002, cuando lanza su programa de Seguridad Democrática con apoyo del Plan Colombia. Debido al consumismo estadounidense,

México se encuentra ahora en el epicentro de esta guerra sin cuartel, perjudicado además por su cercanía a los Estados Unidos.

La propia transición política de México del PRI al PAN generó un quiebre en el control sobre las líneas tradicionales de soborno de los cárteles hacia los líderes políticos. La eliminación de estos “controles” permitió grandes oportunidades de expansión por parte de grupos de traficantes de México, sin las trabas anteriormente aplicadas por el PRI, que había mantenido por largo tiempo el tráfico de drogas en México dentro de los límites “tolerables”.

La aplicación de la leyes mexicanas, que ha sido estructuralmente débil, aunada a las carencias del sistema penal y de justicia, que históricamente han estado plagados por la corrupción y el soborno, dan como resultado un marco institucional completamente inadecuado para confrontar los retos presentados por las organizaciones traficantes de droga, que se aprovechan y benefician de estas debilidades.

Además, hasta hace poco Washington casi no había hecho nada para apoyar a México en su solitaria lucha contra el tráfico de droga dentro de su territorio. Washington tampoco había hecho mucho para controlar la compra y venta de armas de los Estados Unidos hacia México, o para detener el flujo, ida y vuelta, de las grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo entre los Estados Unidos y las organizaciones mexicanas. Aunque es una medida parcial, la aprobación de la Iniciativa Mérida en 2008 constituye un primer paso hacia una nueva era en la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de tráfico de drogas. Además, la mayoría de los analistas concuerdan que el paquete de ayuda de 1,400 millones de dólares es totalmente insuficiente para lograr éxitos rápidos.⁵ Dada las dimensiones de este fenómeno, los problemas que México enfrenta como resultado de la conexión con Colombia, la Iniciativa Mérida representa sólo el comienzo de un gran esfuerzo cuyos resultados aún están por verse.

⁵ Liz Harper, “Blog Drug Flashback: U.S. Foreign Policy and the Drug War,” en *Americas Quarterly: The Policy Journal for our Hemisphere*, April 8, 2009. <http://americasquarterly.org/obama-drug-legalization-mexico>.

4. ¿Quién gana la guerra contra el narcotráfico?⁶

Sergio Aguayo Quezada⁷

Adelanto una respuesta que tiene, como hilo conductor, la centralidad de la información. Empiezo con lo verificable. El Estado salió de su catatonia y lanzó la primera ofensiva sería contra el crimen organizado. Fue una decisión un tanto improvisada; Felipe Calderón no tenía idea de lo que le esperaba. El 15 de junio de 2008 le comentó al director de *El País* que “cuando llegué a la presidencia, [el] alcance [del narco] era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave; pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes y había que sanarlo a como diera lugar”. ¿Diagnosticó bien la dolencia o provocó una metástasis?

Con otra perspectiva, lo que hemos visto en el tiempo que lleva en el gobierno es una batalla en la cual la calidad de la información es vital. El crimen organizado la tiene y de primera. El gobierno y la sociedad están generándola y ello permite categorizar mejor los contornos de la amenaza y adelantar una respuesta a la pregunta: ¿quién gana?

Las buenas noticias. Si la competencia fuera entre gobernantes, Calderón derrota, y con holgura, a Fox y Zedillo. Cuando se comparan los resultados de los primeros 18 meses de los tres gobiernos en el de Calderón se dispara el número de detenidos y la cantidad de decomisos de droga, dinero, armas, aeronaves, etcétera. Otro indicador positivo es una reducción notable en el número de desertores del ejército, una parte de los cuales alimenta las filas del sicariato. Si en 2006 botaron el uniforme 20,536, en 2007 fueron 15,665. La explicación más plausible es que está teniendo efectos positivos el fuerte incremento concedido a los salarios de los militares.

Las malas noticias. Que Calderón derrote a Fox y a Zedillo no justifica una fiesta de la victoria. Las cifras empuñan cuando se les compara con lo que sabemos sobre el dinero que se mueve en el negocio de la droga. El efecto sobre el negocio sigue siendo menor. Con un criterio bastante conservador, en el primer año y medio de gobierno el valor de lo decomisado representa una merma para los cárteles de sólo el 6% del dinero que mueve. El impacto sobre el trasiego de armas es todavía más insignificante: únicamente se capturó 1.4% del total del armamento que se estima ingresó al país durante los primeros 18 meses de este gobierno.

Pese a que sabemos más, sigue habiendo más preguntas que respuestas. ¿cuántos desertores –policías y militares– se convirtieron en sicarios?, ¿de cuántos efectivos arma-

⁶ Síntesis de los artículos publicados en el diario *Reforma* los días 24 de septiembre de 2008 “¿Quién gana?”, y del 17 de diciembre de 2008 “La Barrett 50”.

⁷ El Colegio de México.

dos disponen los cárteles?, ¿cuál es su base social?, ¿cuántas de las armas ilegales no decomisadas están en manos de los cárteles?, ¿qué tanto participa el crimen organizado en la política federal, estatal o local?, ¿tiene, el Estado mexicano, algún plan para anticiparse a los riesgos asociados con la mayor presencia estadounidense en las instituciones de seguridad mexicanas?, ¿y si falla el ejército en el combate al narco, qué sigue?...

También es necesario analizar el consumo, porque en tierra de ateos sucedió el milagro: un año después de lo debido, la Secretaría de Salud acaba de dar en la capital los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Adicciones. Según esta encuesta, en los últimos seis años otro millón de personas probó las drogas y de ellos alrededor de 150 mil desarrollaron dependencia a la adicción. Otra mala noticia es que los jóvenes sin estructura familiar son los más expuestos y de esos hay muchísimos. Cuando se conozca la versión definitiva podré contrastar mi primera impresión: dicha encuesta subestima el aumento en el consumo.

Con lo que sabemos es posible asegurar que la política de Calderón hacia las drogas sigue teniendo dos patas en lugar de tres. Los recursos se dirigen a frenar la producción y el tráfico, sin embargo se dedica una atención insuficiente tanto a las adicciones como al narcomenudeo.

Otro factor decisivo es el tipo de armamento. Mientras el procurador Eduardo Medina Mora bordaba un optimista balance sobre la guerra contra las drogas el pasado 10 de diciembre de 2008, sus guardaespaldas pusieron a su lado una temible Barrett calibre 50. El arma jaló atención, forjó consenso... y recordó cuán débil es el Estado frente a los cañonazos de la corrupción.

En sus primeros 10 minutos, Medina Mora condujo el tour por las tesis oficiales: los gobernantes previos se descuidaron... prosperó a niveles escandalosos el crimen organizado... intervino el gobierno de Felipe Calderón... pese a las dificultades triunfará el Estado... se requiere del respaldo total del gobierno de Estados Unidos con el cual se tiene una cooperación sin precedentes plasmada en la Iniciativa Mérida. Así, establecidas las bases, solicitó la colaboración de Washington para controlar el trasiego de dinero, y frenar la avalancha de armas que llegan desde los 12 mil puntos de venta localizados en el lado estadounidense de la frontera común. Los colaboradores de Medina Mora entraron en procesión con el arma preferida por los francotiradores. Como si fueran anticuarios manipulando reliquias, depositaron la Barrett calibre 50 en una mesa colonial colocada a la siniestra del procurador. Había leído sobre la Barrett, pero nunca la había visto tan cerca. Asusta y fascina. Mide un metro con 22 cm, cuenta con dos patas para sostener un cañón largo, es esbelta y de su elegante gris metálico se desprenden destellos funerarios. De la recámara le sale, como joroba, una gigantesca mira telescópica para ver de cerca al blanco. Tiene un cargador para 10 balas que perforan blindajes, atraviesan concreto y, según algunos, tumban helicópteros.

Dicha arma es tan destructiva, que un juez militar estadounidense consideró pertinente emitir una opinión legal aprobando su utilización contra enemigos. Como si al procurador pareciera gustarle la trivía, comentó que el récord mundial lo tiene un francotirador canadiense, quien en Afganistán pulverizó, con una Barrett, a un enemigo a 2,400 metros de distancia. El narco mexicano cuenta con docenas de Barretts; en un solo operativo en Reynosa les incautaron 17.

Con la atención ganada, Medina Mora lanzó un disparo que dio en el blanco. Esta Barrett 50 cuesta unos 4 mil dólares, y le fue incautada a un cártel que la andaba estrenando. Por haber sido adquirida en Estados Unidos el procurador criticó, desde diferentes ángulos, la facilidad con la cual se pueden adquirir armas en aquel país (un derecho garantizado en la Segunda Enmienda de la Constitución). Sin condenar los modos agresivos del vecino, el procurador mexicano subrayó que la “Segunda Enmienda no fue pensada para armar criminales”. En consecuencia, lanzó una petición a través de los estadounidenses presentes en la sala: reinstalar la prohibición de la “venta de rifles de asalto”; la llegada de Obama podría hacerlo posible.

Fue un planteamiento sensato, impecable, irrefutable. Fue una presentación exitosa porque demostró que urgen más controles sobre la venta y la exportación ilegal de armas a México. Sin embargo, el análisis del procurador tiene flancos débiles. Aseguró, por ejemplo, que el ejército entró a la guerra de las drogas porque los cárteles tienen mejor armamento que los policías; de ello se desprendió que, cuando se interrumpa el suministro de armas, los militares regresarán a los cuarteles. Medina Mora olvidó decir que si las fuerzas armadas patrullan calles, instalan retenes, catean casas y detienen sospechosos es por la debilidad de instituciones como la Procuraduría que él preside.

La principal amenaza del narco no está en su armamento, sino en esos cañonazos en efectivo que corrompen personas y han llevado al desmantelamiento, en los últimos meses, de las cúpulas de la PGR y la SSP. Por la violencia generalizada, y la corrupción desenfadada, avanza la percepción de que México está convirtiéndose en un “Estado fallido”. En el gabinete de Calderón hay quienes tienen una visión pesimista.

El jueves 27 de noviembre de 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, desayunó en su despacho con un grupo de comunicadores. Uno de los presentes, Leonardo Curzio, me sintetizó la esencia del mensaje castrense: la seguridad interna del país está en riesgo grave porque el ejército se está desgastando ante la capacidad de los cárteles de operar en todos lados, porque no se obtiene la colaboración deseada de los gobernadores y presidentes municipales (en especial algunos del PRI), y porque el presidente no se lanza contra aquellos políticos que presuntamente protegen o toleran a los capos (siempre exige pruebas formales).

Si uno lleva ese razonamiento a su conclusión lógica, Felipe Calderón está mostrándose laxo en el combate a la corrupción. Se inhibe por la debilidad del Estado, y

por esos compromisos que lo obligan a respetar una corrupción sistémica. La moraleja es evidente: en la guerra del narco la calidad del armamento es importante; lo son más esos cañonazos de corrupción sobre la consistencia de personas, instituciones y discursos.